El campo en la encrucijada

Arturo Warman *

Formo parte de la minoría que no está convencida de que el campo pasa por el peor momento de su historia. En el último decenio el producto agropecuario creció en promedio por arriba de la población nacional, revirtiendo la tendencia del decenio previo. Ese crecimiento modesto, de alrededor de 2% anual, triplica el incremento en la población rural. Las exportaciones se han incrementado más rápido que el producto agropecuario. Desde la reforma constitucional del artículo 27 en 1992 se han abatido los conflictos agrarios y se ha fortalecido la seguridad jurídica de las modalidades de la propiedad rural. Cerca de las cuatro quintas partes de los ejidos del país ya cuentan con certificados individuales y colectivos sobre su propiedad. Los productores rurales más pobres están recibiendo apoyos directos a su ingreso, primero a través del Procampo desde 1994 y más tarde por el Progresa desde 1997. En el país la población dedicada al trabajo del campo ya no crece o lo hace muy lentamente y en algunos estados empieza a descender en términos absolutos. Estos y otros datos no sustentan el diagnóstico de que el campo está peor que nunca, mucho menos cerca de un desastre terminal.

Sin embargo estamos lejos de superar la profunda y prolongada crisis que se abate sobre el campo. Hace 35 años, cuando me inicié en los estudios rurales, el tema era su crisis. Lo sigue siendo ahora, por lo que me cabe el dudoso honor de haberme especializado en la crisis rural perpetua. Los datos que permiten alegar que el campo no está en su peor momento no tienen la fuerza ni la velocidad suficientes para postular que la crisis ha sido superada, ni siquiera para sugerir una firme tendencia en esa dirección; apenas alcanzan para suponer que no se está agravando. El estado crítico persiste y el campo todavía se encuentra frente a una encrucijada que lo puede encaminar hacia su dolorosa agonía, con enormes costos y riesgos para el conjunto nacional, o a su lenta pero firme revitalización, que también implica costos o mejor dicho inversiones a largo plazo por parte de la sociedad, que rompa los nudos formados en la estructura de la producción y la vida rural.

Una mirada distante nos informa que en el año 2000 uno de cuatro mexicanos vivía en el campo o en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, y uno de cada cinco se dedicaba a las labores agropecuarias, es decir, alrededor de 25 millones de mexicanos. En el campo uno de cada seis habitantes habla una lengua indígena. La enorme muchedumbre rural, del mismo tamaño que la población de todo el país en 1950, apenas aporta alrededor de 5% del producto nacional. Una proporción muy importante de los mexicanos, cerca de la cuarta parte, apenas pro-

* Antropólogo. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

duce cada año la vigésima parte del total nacional. Una ecuación así se resuelve en la pobreza agregada del sector rural o agropecuario. Más de la mitad de las familias rurales está afectada por la pobreza extrema; las tres cuartas partes de los pobres extremos del país viven en el campo. La pobreza es el principal problema del campo y conforma una de las barreras más recias para el desarrollo nacional sostenido.

Otra mirada más detallada y un poco menos distante nos muestra que la pobreza rural agregada está muy mal repartida. El campo está afectado por la concentración excesiva de la riqueza y por la iniquidad regional. Extrapolando datos del Censo Agropecuario de 1991 –el censo programado para el 2001, acaso el más importante de la historia, fue suspendido indefinidamente alegando razones de austeridad presupuestal–, hay alrededor de cuatro y medio millones de unidades de producción rurales con alrededor de tres millones de ejidatarios o comuneros y millón y medio de propietarios privados. Apenas unas 15 mil de esas unidades son empresas grandes y otras 140 mil son empresas pequeñas, que contratan mano de obra para producir. Alrededor de un millón 100 mil unidades combinan la mano de obra familiar y contratada para vivir de los ingresos que generan. El 70% de las unidades, un poco más de tres millones, son minifundistas, es decir que la producción agropecuaria de su unidad no les alcanza para solventar los costos de permanencia de la familia, por lo que recurren a la obtención de ingresos fuera de sus predios para sobrevivir en aguda pobreza. Desde otra óptica: menos de la tercera parte de las unidades de producción logran vivir con sus ingresos agropecuarios, entre ellos unas 15 mil empresas grandes que concentran cerca de la mitad del valor de la producción rural. La pobreza agregada del sector encubre una gran iniquidad dentro del mismo.

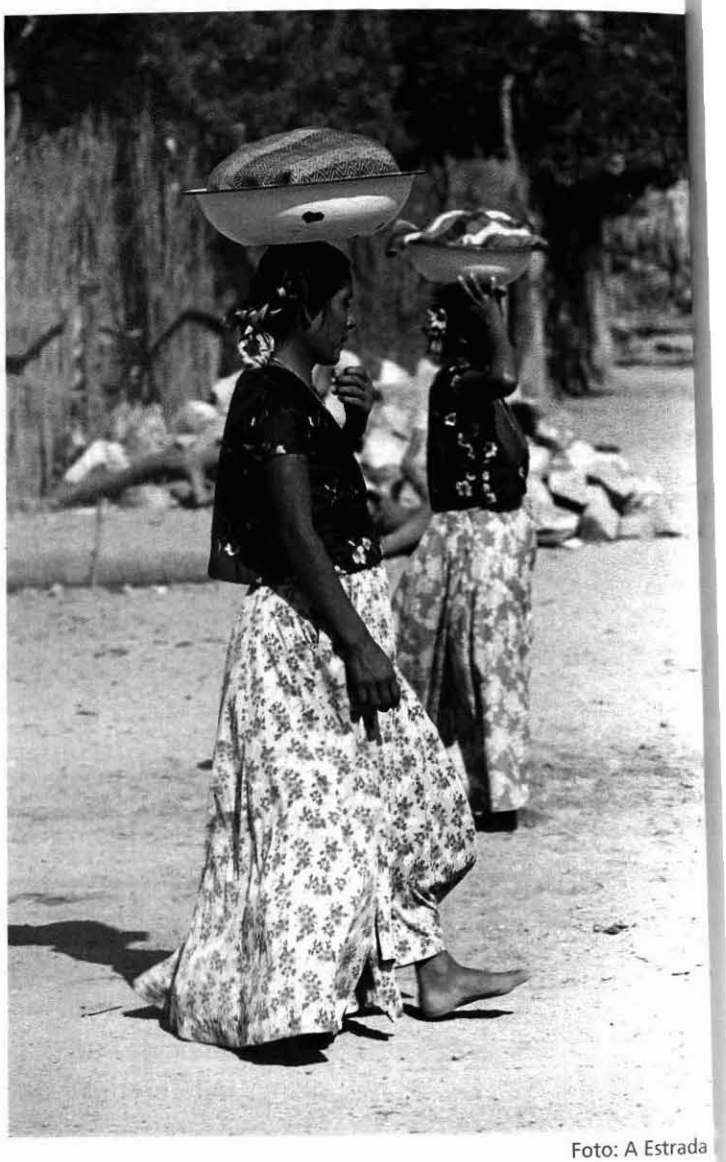


Foto: A Estrada

La desigualdad interna del sector se expresa regionalmente. En el centro-norte y el noroeste del país se concentran las obras de infraestructura para la producción agropecuaria, particularmente las de irrigación, frente a un sur dejado a la mano de Dios y de los agricultores o ganaderos de esa porción del país. La inversión pública generó esos enclaves de privilegio que arrastraron por décadas hacia sí

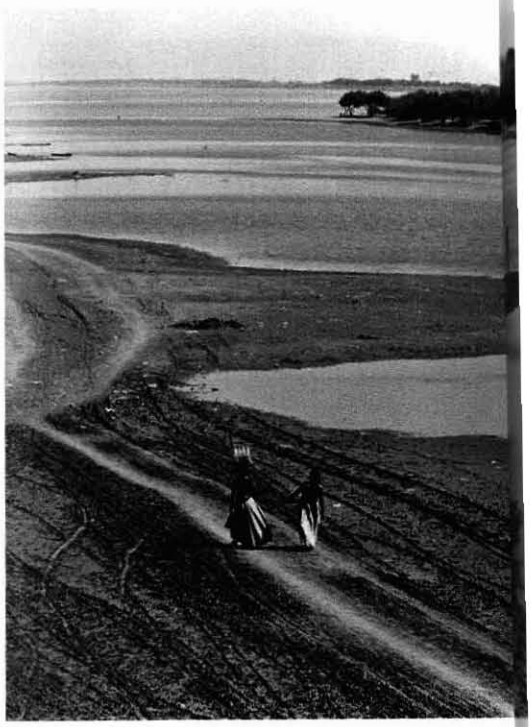
mismos todas las inversiones y subsidios para el campo. Los subsidios a las zonas irrigadas superan todavía con amplitud los que reciben los campesinos pobres del país. Las políticas agrarias y agropecuarias de México no sólo responden por la desigualdad regional, también lo hacen por el daño causado a la naturaleza y sus recursos. Deforestación de más de medio millón de hectáreas por año, extracción abusiva de aguas subterráneas, salinización, desertificación, erosión y otros muchos males, muchos irreparables, afectan severamente a la tierra mexicana y a quienes la trabajan. La reversión de esa tendencia a la destrucción de los recursos es una urgencia nacional; costará mucho dinero lograrlo, lo cual ojalá se invierta en promover desarrollo rural sustentable y equitativo.

Si acercamos más la mirada hacia los campesinos podemos percibir que los hermanos siameses minifundio y pobreza permanecen en la vida de la mayoría de los productores y trabajadores del campo, que se extienden sin generar crecimiento ni progreso. Más de la mitad de los campesinos obtienen más ingreso fuera de su predio que de él. El peonaje o trabajo asalariado en su comunidad, región o en los ejércitos itinerantes de la migración estacional, es la principal fuente de ingresos fuera del predio. El trabajo rural, falsamente equiparado en nuestra legislación al trabajo fabril, no está debidamente regulado ni protegido y no proporciona acceso a la seguridad social. Muchos minifundistas se definen como peones cuando en los censos se pregunta por su actividad principal. La segunda fuente de ingresos se deriva de la remisión de dinero por quienes no pudieron permanecer en el campo y emigraron de manera definitiva a las ciudades o al extranjero pero conservan raíz y relaciones en su comunidad. Artesanías, extracción o recolección de recursos naturales, turismo y todo lo que aparezca, complementan los ingresos que los campesinos obtienen en sus predios, en un equilibrio austero e inestable.

La mitad de los titulares de la propiedad agraria tienen más de cincuenta años de edad, con una esperanza de vida promedio de setenta años. Desprovistos de los beneficios de la seguridad social para enfrentar su vejez tienen que recurrir a su titularidad agraria como seguro. Naturalmente no la exponen con riesgos ni aventuras, resisten a los cambios que puedan alterar su precaria seguridad. Mientras tanto, los sucesores y herederos jóvenes o no tanto, más dispuestos

Foto: Jorge Acevedo

a innovar, no acceden a las responsabilidades ni decisiones de la propiedad. Se configura una circularidad conservadora reacia y resistente a la transformación técnica y a la asociación, otra barrera a la transformación. Esta situación promueve la dispersión de la población rural, que establece localidades nuevas y pequeñas para reproducir en condiciones más pobres la existencia conocida, hasta sumar cerca de 200 mil localidades en todo el país. Los servicios esenciales, concebidos para ser brindados por grandes obras, no pueden alcanzar a más de la mitad de esas localidades.



La producción campesina está cercada por una voraz red de intermediarios comerciales, financieros o mejor usureros, de transporte y técnicos que encarece lo que los productores compran y abarata lo que venden. Los elevados costos de intermediación desalientan la elevación de la productividad y participación en el mercado, contribuyen a fortalecer la tendencia conservadora de los productores campesinos. Las tierras para ampliar la producción campesina están agotadas, se alcanzaron los límites para el crecimiento territorial y se presenta la saturación. Mucha gente sale del campo pero se quedan los que admite este espacio saturado frente a las grandes incertidumbres y dificultades de encontrar acomodo fuera de su comunidad.

En 1992 se apostó por la inversión en el campo para desatar los nudos que traban el desarrollo. La apuesta plausible tropezó con severas barreras imprevistas. La inversión pública, la de mayor magnitud y peso en el campo, no sólo no pudo crecer sino que disminuyó frente a la crisis financiera y de la recaudación fiscal. La inversión pública para la formación de capital apenas alcanzó para el mantenimiento insuficiente de los activos históricos, que se han deteriorado y son obsoletos. Los subsidios quedaron montados entre la inercia previa que favorece a los productores comerciales, en especial a los empresariales, y los de nuevo cuño orientados a la compensación de las desventajas estructurales frente a la apertura comercial para todos los productores. Permanecen los subsidios al privilegio aunque sus receptores alegan que son insuficientes y deben aumentarse. Los subsidios compensatorios se quedaron chicos para cumplir su función: complementan de manera limitada el ingreso de los productores pobres y resultan poco trascendentes para los productores ricos. Los subsidios a la actividad agropecuaria son de proporción equiparable a la que otorgan los competidores externos pero se diluyen frente a indefiniciones en su propósito y el enorme número de unidades de producción en condiciones extremas de desigualdad. Los recursos públicos son insuficientes para desatar las barreras estructurales por sí mismos, aunque una orientación precisa y un manejo eficaz podrían superar muchas de sus limitaciones.

Foto: A Estrada

Los indispensables recursos de la inversión privada no han llegado al campo con la magnitud y la velocidad necesarias para generar cambios estructurales significativos. En parte, esto se explica por el escenario de crisis financiera y precios internacionales con tendencia a la baja para los productos agropecuarios, que han desalentado la transferencia de capitales de otros sectores hacia el agropecuario. La otra fuente de inversión privada, las empresas agropecuarias, se ha aferrado a las inercias previas donde las ganancias se obtienen más de la captura de subsidios públicos que del incremento de la productividad y competitividad. La descapitalización en el campo puede haber disminuido pero no se ha suspendido. Las sociedades mercantiles son excepcionales y la asociación entre las distintas formas de propiedad ha prosperado de manera escasa y casi clandestinamente. La circulación de la propiedad agraria es lenta, desconfiada y con frecuencia permanece al margen de la ley a través de tratos informales que no se traducen en capitalización. La transformación de la estructura productiva en el campo, reflejo de la inversión de capital, no muestra desviaciones respecto a su tendencia antes de 1992.

El empate crítico entre una producción agropecuaria dirigida y financiada por el Estado y otra en manos de los productores y sus decisiones, permanece sin resolución. Se podría alegar que los resultados alentadores aunque modestos de la última década sugieren que las fuerzas transformadoras ya están actuando, que ya frenaron el deterioro. En sentido contrario podría aducirse que el ritmo del cambio es insuficiente, que su dirección no es clara y que sus impactos estructurales son todavía cosméticos, que pese a todo la encrucijada permanece enfrente.

En los debates políticos sobre el campo, que suceden sobre todo en el Congreso o frente a las secretarías de Estado, son ocasionales, superficiales y carecen de continuidad. La encrucijada o el problema estructural y su correlato, la aspiración a largo plazo, poco se mencionan. Las grandes discusiones parecen arraigadas en el pasado cada vez más remoto. El monto y destino de los subsidios corporativos es el tema que más pasiones despierta y fortalece la prolongación del empate, casi de la parálisis. El alivio temporal e insuficiente con programas emergentes para los productores de café, piña, caña de azúcar, maíz de Sinaloa, entre otros, mitiga síntomas pero no alcanza las raíces y pronostica la repetición de la demanda y su solución paliativa. Los hoyos son cada vez más grandes y numerosos mientras que la capacidad de taparlos se reduce. A veces se vuelve al debate sobre el artículo 27 para prevenir la reaparición del latifundio o la privatización del ejido, procesos que no se han presentado y que parece poco posible que lo hagan. Otras veces se pelea alrededor de la autosuficiencia alimentaria, concepto elusivo y confuso en un marco de fronteras abiertas, para proteger intereses particulares. El debate se concentra en lo inmediato y es omiso respecto al punto de destino, así como sobre las rutas para alcanzarlo. El inmediatismo, si se sigue prolongando, equivale a una decisión por la catástrofe, por la derrota.

La débil representación política de los campesinos y productores del campo explica en gran medida la desorientación del debate y el desorden en las acciones. Los partidos políticos importantes carecen de propuestas claras para superar la crisis en el campo aunque abunden las declaraciones abstractas sobre un campo rico y justo, que todos podemos compartir. Esos enunciados no sustituyen la ausencia de programas consistentes. En la acción política los partidos adoptan posiciones y causas erráticas cuando no contradictorias con propósitos muchos más estrechos e inmediatos: oponerse, aliarse, abanderar movilizaciones surgidas espontáneamente o desde abajo, ganar el voto. Las políticas respecto al campo son instrumentales para los partidos políticos existentes por lo que frecuentemente desembocan en populismo y demagogia.

Los partidos políticos incorporaron a las centrales campesinas formadas alrededor de la lucha por la tierra como sus filiales agrarias en busca del voto verde, por lo que absorbieron posiciones anacrónicas, conservadoras. Esas centrales u organizaciones cupulares que representaban fundamentalmente a los solicitantes de tierras, no han reaccionado con agilidad ni profundidad a la caducidad de su propósito a partir de las reformas constitucionales de 1992. Entre la negociación de los saldos del reparto agrario y la búsqueda de posiciones en los nuevos espacios abiertos para los partidos políticos, las centrales campesinas se estancaron y se quedaron al margen de los procesos y disputas alrededor de la producción rural y su destino. Los productores rurales se quedaron sin representación política, sin canales para transmitir a la representación nacional sus problemas y propuestas. Están surgiendo distintos tipos y formas de organización gremiales y regionales para restablecer las líneas de transmisión entre la realidad rural y la representación política. Frente a los espacios ocupados por las centrales campesinas de viejo cuño y la indiferencia de los partidos políticos, las nuevas organizaciones tropiezan con enormes dificultades para plantear sus posiciones en un contexto político desdibujado y desarticulado. La debilidad de la representación política de los campesinos permanece en condiciones de avance democrático inmaduro que todavía no otorga representación a la diversidad nacional.

En el campo no hay un desastre pero tampoco una esperanza, hay un problema que requiere de análisis y discusión profunda con la participación de los productores rurales, para tomar decisiones de aliento comparable y visión de largo plazo. El campo no sólo resiente una coyuntura desfavorable, ojalá que el fenómeno del "Niño" no la convierta en emergencia nacional, sino una crisis estructural que la reforma inconclusa de 1992 no ha logrado superar. La transformación estructural, que es fatalmente dilatada, puede abordarse desde muchos frentes y perspectivas pero no se puede incidir en ella con ocurrencias ni improvisaciones; la continuidad y perseverancia, la certeza, son condiciones esenciales para avanzar. Se requiere de un

Foto: A Estrada

acuerdo nacional democrático que defina una política de largo plazo, persistente pero no rígida, para el desarrollo rural, que incluya una clara definición del papel de los recursos y las instituciones públicas. Quizá no estén dadas las condiciones políticas para plantear, debatir y alcanzar un acuerdo nacional para el desarrollo del campo en estos momentos, pero es necesario considerar el riesgo de que la prolongación de la indefinición se vuelva la solución, probablemente la peor de todas las posibles. La experiencia en que la inercia se volvió definición la vivimos en el siglo XX y origina la crisis perpetua que todavía se abate sobre el campo. Nadie tiene idea de cuando se deja atrás la encrucijada, pero cada ciclo productivo salvado o arruinado por la inercia aumenta el riesgo de que la disyuntiva, oculta como está por las turbulencias coyunturales y los vacíos políticos, pase desapercibida. ❋

Nota: las cifras, proporciones y magnitudes que se mencionan están sustentadas en mi libro *El campo mexicano en el siglo XX*, FCE, México, 2001. También en él se apoyan los conceptos y posiciones.